

El carbón no se rinde

La situación en el sector del carbón en los últimos meses no ha dejado indiferente a nadie. El retraso en la puesta en marcha del real decreto que regulaba las ayudas al carbón autóctono ha provocado que muchas empresas y sus trabajadores se hayan visto en una situación muy complicada. Tras meses de lucha sindical, y cuando todo parecía emprender el camino de la solución, la impugnación del real decreto por parte de las eléctricas y de la Xunta de Galicia agravó el problema.

La Federación de Industria de CCOO lleva meses exigiendo a la Administración su implicación para que la puesta en marcha del Real Decreto permita alcanzar la normalidad, reconduciendo los expedientes de regulación de empleo que se han venido aprobando de forma generalizada en el sector, hacia una incorporación paulatina de los trabajadores a sus puestos de trabajo. Esta es la única vía que permitirá aliviar la precaria y anómala situación que sufren los afectados y reducir el alto grado de incertidumbre al que están sometidos tanto los trabajadores como las propias comarcas mineras.

“No se puede hablar del elevado coste de nuestro carbón haciendo tabla rasa de las consecuencias sociales que está teniendo el cierre de las explotaciones en las comarcas de Asturias, León, Palencia, Teruel o Cataluña”



“Renunciar a la única fuente de energía propia, el carbón, nos sitúa en una posición de mayor grado de dependencia exterior y de inestabilidad en el abastecimiento y los precios”



JUAN CARLOS ÁLVAREZ LIÉBANA
responsable del sector
de Industrias Extractivas de la
Federación de Industria de CCOO

La reconversión de sectores productivos que fueron soportes importantísimos de la actividad económica y del empleo en nuestro país se presenta como un interminable túnel que no alcanza la luz. Tal es el caso de la minería del carbón.

Reconversión que para los actuales gobernantes tecnócratas quiere decir la eliminación drástica de puestos de trabajo, no acompañada de nuevas actividades alternativas que palien los graves efectos sociales sobre las zonas afectadas, soslayando asimismo otras repercusiones de naturaleza medioambiental, dependencia exterior, etc.

Recientemente, los representantes sindicales de los mineros españoles se encerraron en el Ministerio de Industria, después de haber peregrinado en reiteradas ocasiones para denunciar ante el mismo Ministerio la política de hechos consumados de la que viene siendo víctima el sector y que amenaza a no muy largo plazo con el cierre casi total de las explotaciones mineras.

No se trata de que los mineros y sus sindicatos más representativos se nieguen a contemplar, junto a la patronal y la Administración, planes precisos que puedan hacer más competitivo nuestro carbón. El problema es que este Gobierno viene hurtando a los mineros y al país un debate en profundidad sobre la cuestión toda vez que va consumando acciones que hacen cada día más irreversible la caída del sector.

La minería del carbón ha pasado de 24.405 empleos en el año 1998 a poco más de 5.000 en 2009, lo que da una idea del declive del sector. Pero el dato más significativo de una política no comprometida e ineficaz de esta Administración lo hallamos en el incumplimiento sobre las nuevas iniciativas industriales en las zonas y comarcas donde se asienta la minería del carbón.

Pues bien, cuando todavía el Gobierno no ha sabido o no ha querido explicar tamaños incumplimientos, tanto en los datos sobre el empleo y las producciones naciona-

les de carbón como sobre la mal llamada reactivación, ya se han decretado nuevas medidas, amparándose en la decisión del Consejo de la UE de 10 de diciembre de 2010, de acoso y derribo del sector carbonífero.

Como las anteriores, la citada orden compromete a la Administración a pagar ayudas para dejar de producir. Es curioso, el Gobierno no subvenciona posibles planes de reflotación, sino simple y llanamente el cierre.

En definitiva, así las cosas, el sector carbonífero en España marcha hacia su desaparición. Y mucho nos tememos los mineros que ello sea recibido con indiferencia cuando no con aquiescencia por amplios sectores sociales. No sería extraño. Los últimos gobiernos, independiente de su color, han venido tejiendo largamente una campaña para respaldar su política de hechos consumados basada en argumentos tales como: “el país no puede seguir soportando las subvenciones al carbón nacional”, “la UE nos obliga a nuevos planes de reconversión del sector”, “que si el efecto invernadero”, “es más barato el carbón de importación”, etc.

Costes y contaminación

Hay que volver a insistir en que no se puede hablar del elevado coste de nuestro carbón haciendo tabla rasa de las consecuencias sociales que está teniendo el cierre de las explotaciones en las comarcas de Asturias, León, Palencia, Teruel, Cataluña, etc., e ignorando que el ahorro de las subvenciones al carbón trae consigo otros costes en divisas al traer carbón de importación, en subvenciones al desempleo, prejubilaciones, y en opciones energéticas que, además de no ser más baratas, comportan gravísimos riesgos para todos los ciudadanos.

Otro de los grandes inconvenientes atribuido al carbón ha sido el factor contaminante, pues bien, en los últimos años, las centrales térmicas españolas están realizando un gran esfuerzo inversor en equipamientos tecnológicos y medioambientales para reducir de manera significativa las emisiones contaminantes derivadas de la combustión de carbón. A esto hay que unir una serie de proyectos investigadores pioneros para lograr antes del año 2020 el objetivo de ‘emisiones cero’ o ‘combustión limpia del carbón’.

Por otra parte, es necesario resaltar que las energías alternativas necesitan de un amplio periodo temporal para solucionar sus limitaciones técnicas (desarrollo tec-

nológico, capacidad de almacenamiento, redes de transporte.....), sin olvidar la necesidad de reducir sus altos costes que nos han llevado a un precio de la energía desmesurado encareciendo la tarifa eléctrica para uso doméstico además de colocar a nuestros sectores productivos en claro riesgo de reducir su competitividad, por lo que en la actualidad y, según todas las previsiones, en al menos los próximos 30 años seguirán siendo necesarias las energías tradicionales.

La electricidad es una materia prima indispensable en todos los procesos productivos y un bien de demanda básica para el conjunto de la ciudadanía, es decir, se trata de un servicio esencial. La electricidad se consume en el

[Al menos durante los próximos 30 años seguirán siendo necesarias las energías tradicionales]

momento de producirla y hay que cubrir la demanda de forma permanente, por lo que una capacidad e infraestructura suficiente para generar electricidad supone una preocupación constante junto a las redes de transmisión y distribución. Al mismo tiempo, la garantía de suministro en cantidad y calidad, a precios adecuados, es un factor de competitividad de primer orden y tiene implicaciones directas en las inversiones de amplios sectores de la economía, especialmente en los procesos industriales.

Por eso a CCOO nos parece imprescindible un debate nacional sobre estas cuestiones, que culmine con el establecimiento de una política carbonera no al margen, sino dentro del conjunto de la política energética nacional. Porque muchos de los argumentos de la Administración sobre la no rentabilidad del carbón expresa verdades a medias o simples falacias, que ocultan otros intereses políticos y económicos, y además, porque renunciar a la única fuente de energía propia, el carbón, nos sitúa en una posición de mayor grado de dependencia exterior y de inestabilidad en el abastecimiento y los precios, agravándose, como consecuencia de la incertidumbre y la convulsión social que actualmente se está produciendo en los países del norte de África, que afectará a la industria, a los mineros y a la sociedad en general ◊